## La integración sudamericana y sus retos futuros

Memorias del Seminario

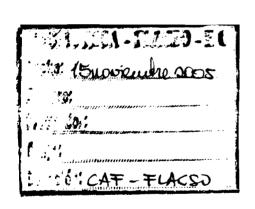
## La integración sudamericana y sus retos futuros

Memorias del Seminario Quito, 29-30 de junio de 2005









© De la presente edición: FLACSO, Sede Ecuador La Pradera E7-174 y Av. Diego de Almagro Quito – Ecuador

Telf.: (593-2-) 3238888 Fax: (593-2) 3237960 www.flacso.org.ec

ISBN: 9978-67-099-8

Sistematización: Claudia Donoso

Diseño de portada e interiores: Antonio Mena

Imprenta: RISPERGRAF Quito, Ecuador, 2005 1ª. edición: julio, 2005

### Índice

Introducción Antonio Parra Gil	7
Luis Palau	9
Adrián Bonilla	10
PONENCIAS	
Integración comercial y territorio	15
Democracia, seguridad y gobernabilidad en Sudamérica	27
Cohesión social y justicia social: el camino de la OTCA	37
Migración internacional e inclusión social: un nuevo desafío de la integración regional	41
La equidad de género: un desafío para la Comunidad Sudamericana	51
La ALADI y la integración comercial asimétrica en Sudamérica Didier Opertti	67
El SELA, la integración comercial y asimetrías en Sudamérica	75
La promoción del desarrollo sustentable de las regiones compartidas y la atención de las asimetrías regionales:	
un camino hacia la profundización de la integración	83
Biodiversidad y la promoción del medio ambiente:	
la visión de la OTCA	91

#### **PRESENTACIONES**

de integración en Sudamérica	99
Integración económica y cohesión social en Sudamérica	109
Una visión de la CAN respecto a la seguridad, gobernabilidad y democracia en Sudamérica	133
Integración y democracia	139
Comunidad Sudamericana de Naciones: integración comercial y asimetrías	145
Integración energética en Sudamérica	151
La biodiversidad y la promoción del medio ambiente en Sudamérica Yolanda Kakabadse	159
Desarrollo de infraestructuras regionales versus medio ambiente Jorge Jurado	163
Síntesis y conclusiones	173

# Cohesión social y justicia social: el camino de la OTCA

Rosalía Arteaga'

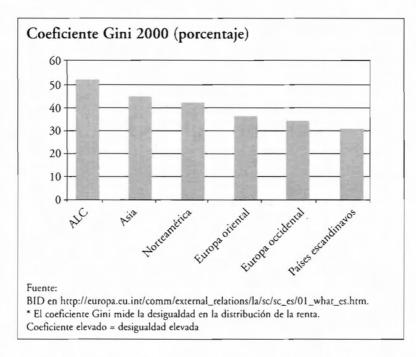
La cohesión social es un aspecto que está siendo incluido en la agenda de los países con cada vez mas intensidad e inclusive viene siendo abordada en encuentros y reuniones internacionales. Su concepto abarca el tratamiento de los problemas relacionados con la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que son aspectos que integran de forma general las políticas sociales de nuestros países. La cohesión, como parte integrante de esa agenda social, presenta variaciones y particularidades en cada uno de ellos, entre tanto exige de forma general políticas y acciones específicas de los Gobiernos para prevenir y erradicar la pobreza y la exclusión y promover la integración y participación de todos los ciudadanos en la vida económica y social de las naciones.

La preocupación por la cohesión social hace hincapié en el carácter multidimensional de la pobreza. En el análisis de este fenómeno, el PIB per cápita ya no puede considerarse como el único indicador de bienestar. Por lo tanto, el crecimiento no es condición suficiente para el desarrollo, sino sólo una condición necesaria. De esta forma se inicia la construcción de un amplio consenso con respecto al hecho de que América Latina no podrá aspirar a un crecimiento sostenible si no se combaten las fuentes de exclusión de una gran parte de su población.

En numerosos países se han observado progresos significativos en relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sobre todo en lo

<sup>1</sup> Secretaria General del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

que se refiere al acceso de todos a la enseñanza primaria y mejores condiciones de salud. No obstante, aún hay limitaciones en cuanto a la mortalidad infantil, acceso al agua potable y vulnerabilidad frente a determinadas enfermedades transmisibles. Adicionalmente, nuestra región es conocida como la menos igualitaria y equitativa del planeta. En el conjunto de América Latina y del Caribe existen desigualdades notorias en cuanto a la distribución de la renta y al acceso a bienes como la tierra, la educación o el crédito. El cuadro a seguir presenta esas variaciones:



El esfuerzo realizado por las naciones latinoamericanas en las dos décadas pasadas para modernizar su economía y estabilizar el régimen democrático y el respeto de los derechos humanos produjo importantes dividendos en términos de crecimiento, comercio e inversión, pero esto no se ha traducido en grandes mejoras en las condiciones de vida de todas las capas sociales. A pesar del gran esfuerzo realizado para mejorar la calidad de vida e incrementar el gasto público en asuntos sociales, ha ocurrido un aumento del número de pobres en la pasada década.

Nuestros países no sólo están afectados por las desigualdades existentes entre los individuos, sino que también se caracterizan por su dimensión geográfica específica. Dentro de cada país, las distintas regiones presentan a menudo divergencias en su proceso de desarrollo y tiene características sociales, económicas, políticas, institucionales y ambientales bastante diferentes. Sólo las regiones que disponen de infraestructura suficiente y de un acceso a los mercados y a recursos humanos cualificados han sido capaces de integrarse mejor a los mercados mundiales y de obtener beneficios del fenómeno de la globalización. De esta forma, es posible afirmar que la teoría del "centro-periferia" se ha aplicado perfectamente con una tendencia a beneficiar un mayor desarrollo del centro y menor de la periferia.

En los últimos años ha sido posible verificar una intensificación de las desigualdades, además, de la aún existente exclusión de determinados grupos sociales que son víctimas de

discriminación en razón de su sexo, edad, origen étnico o racial, posición social, raza, minusvalía, enfermedad u otros rasgos identificadores. En ese contexto, mejorar la representación política y la participación en nivel nacional, regional y local puede ser un factor esencial para detener los procesos de exclusión económica, social y política.

Los países latinoamericanos han reconocido la necesidad de priorizar la cohesión social con ocasión de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en noviembre de 2003 en Santa Cruz de la Sierra-Bolivia. Ha sido también el centro de la agenda de la Cúpula de América Latina, el Caribe y la Unión Europea realizada en Guadalajara en mayo de 2004. Combatir las desigualdades sociales y garantizar una sociedad más integradora es hoy una prioridad de orden moral, económico y político, así como, crecer a partir de una sociedad cohesionada y preocupada de reducir las brechas entre sus miembros es la promesa de cambio progresivo que puede unir a la sociedad dentro de la actual economía de mercado.

En Guadalajara la pobreza, la exclusión y la desigualdad fueron reconocidas como afrentas a la dignidad humana; como factores que debilitan la democracia y amenazan la paz y la estabilidad. Por otro lado fue reiterado el compromiso regional por alcanzar las Metas de Desarrollo del Milenio para el año 2015 y destacada la determinación de construir sociedades más justas a través del fortalecimiento de la cohesión social, especialmente teniendo en consideración el principio de responsabilidad global común.

Como alternativas, fueron consideradas el fomento de la inversión social enfocada a la educación en todos los niveles, la nutrición, la salud, la vivienda, el agua potable y el alcantarillado, así como proyectos de desarrollo de infraestructura con empleo intensivo, para aliviar la pobreza. Los mecanismos financieros innovadores de carácter multilateral han sido reconocidos como instrumentos esenciales para lograr estos fines, así como la necesidad de dedicar un nivel adecuado de gasto público para ellos, evitando la dependencia exclusiva del financiamiento externo para esas políticas.

En Santa Cruz fue reconocido que el incremento de la pobreza, inequidad y exclusión constituye una seria amenaza a la gobernabilidad democrática en América Latina y una afrenta a la dignidad de los pueblos y que las políticas sociales deben constituirse en políticas de Estado que aseguren inversiones estratégicas en capital humano, social y natural de los países, que potencien a las personas, instituciones y territorios en la búsqueda de equidad y cohesión social para hacer viables las políticas económicas; mejoren la competitividad de las regiones; aseguren la redistribución de los resultados del crecimiento económico y generen mejores condiciones para la gobernabilidad democrática.

Los Mandatarios, en ese encuentro, manifestaron también su reconocimiento de que es necesario innovar la intervención de los Estados, privilegiando una concepción integral y territorial de desarrollo para superar los enfoques sectoriales que generan dispersión, superposición, y fragmentación de funciones e ineficiencia en la inversión social, fortaleciendo con ello los procesos de descentralización en curso. El compromiso político de trabajar para que los tributos, el gasto público y la seguridad social puedan contribuir para establecer niveles mínimos de ingreso, protección frente a los riesgos y generen igualdad de oportunidades y derechos al margen del mercado, fue manifestado.

Así, trabajar por fortalecer la cohesión social desde una perspectiva latinoamericana que comprenda las identidades y diversidades socio culturales de nuestros pueblos, fomentando los valores de la democracia, la ciudadanía, la solidaridad, la soberanía y la identidad nacional, para vincular con un enfoque territorial lo nacional y lo regional y alcanzar la inclusión, la equidad y la justicia social, es el desafío que enfrentamos y que hace parte en conjunto con la conservación ambiental de lo que denominamos desarrollo sostenido, que es hoy el eje de actuación de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica.

Aplicar una estrategia de inversión social que considere la asignación y ejecución transparente de recursos públicos y una política fiscal equilibrada para optimizar las acciones dirigidas a beneficiar a los sectores más pobres, y excluidos; impulsar y promover desde los sectores público y privado, políticas que generen condiciones sostenibles de empleo de calidad y que propicien el aumento de la productividad; y desarrollar políticas macroeconómicas orientadas a superar la pobreza que comprendan esquemas financieros que hagan posible ampliar la inversión social, eliminando progresivamente el asistencialismo y desarrollar capacidades humanas e institucionales, son aspectos relacionados a la gestión pública que influencian la búsqueda de la cohesión, reconocidos como relevantes y que deben ser considerados dentro de una política de cohesión social.

La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) ha sido creada en ese contexto y por ello ha incorporado dentro de su misión el deber de trabajar por hacer efectivos los procesos de integración y desarrollo sostenible regional, fomentando la activa participación de los países miembros y de sus actores regionales y locales en la construcción de soluciones, buscando la distribución equitativa de los beneficios generados y favoreciendo la construcción de sinergias y la capacidad de negociación en bloque frente a los temas de interés regional. Su misión y el mandato político recibido de sus países miembros por intermedio de su Plan Estratégico, le permite no solamente buscar la inclusión social si no también maximizar el beneficio social y económico que puede ser obtenido del bosque tropical, buscando que los beneficios sean distribuidos para la presente y futuras generaciones.

Creemos que las orientaciones políticas así como los mandatos estratégicos ya han sido dados, cabe ahora a nuestras organizaciones, sean ellas de carácter público o privado, bilateral o multilateral o del área económica, social o ambiental, comenzar a construir las soluciones específicas e incorporar de forma transversal en todos sus procesos y acciones las bases de la inclusión y de esta forma contribuir para las transformaciones que la sociedad latino americana está demandando.